

Julio 12 de 1940

## 15ª REUNION — 12ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor **MATIAS G. SANCHEZ SORONDO**,

Vicepresidente del Senado

**Ministro presente:** de Agricultura, doctor Cosme Massini Ezcurra.

**Senadores presentes:** Ricardo Caballero, Juan Cepeda, Alberto Francisco Figueroa, Francisco R. Galíndez, Héctor González Iramain, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, Lucio López Peña, José Heriberto Martínez, Alfredo L. Palacios, Jorge J. Pinto, Guillermo Rothe, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, José P. Tamborini, Benjamín Villafañe.

**Senador ausente, con licencia:** Robustiano Patrón Costas.

**Senadores ausentes, con aviso:** Alberto Arancibia Rodríguez, Manuel García Fernández, Gilberto Suárez Lago, Juan R. Vidal.

**Senadores ausentes:** Mario Arenas, Herminio Arrieta, Aldo Cantoni, Juan B. Castro, Raúl Ceballos Reyes, Atanasio Eguiguren, Juan José Lubary.

### SUMARIO

1.—Homenaje a la memoria del doctor Francisco Uriburu.

2.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo, invitando al Senado al tedéum del día 9 del actual, y llevando a su conocimiento el decreto por el que queda en ejercicio del Poder Ejecutivo, el señor vicepresidente de la Nación, doctor Ramón S. Castillo.

II.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.

III.—Despacho de comisión.

IV.—Comisión especial para los actos conmemorativos del 9 de Julio, en Tucumán.

V.—Peticiones.

3.—Moción del senador Santamarina, en el sentido de fijar la sesión del jueves próximo, para tratar como primer asunto, la formación de las ternas para llenar las vacantes de las diócesis de Santiago del Estero y Resistencia. Se aprueba.

4.—Proyecto de ley, del senador Sánchez Sorondo, por el que se acuerda pensión a las señoritas Sofía y Fanny Dimet.

5.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio, en el proyecto de ley, en revisión, sobre colonización. Se suspende, pasando la Cámara a cuarto intermedio.

—En Buenos Aires, a los doce días del mes de julio de 1940, siendo la hora 16, dice el

Sr. Presidente (Sánchez Sorondo). — Queda abierta la sesión.

1

### HOMENAJE

Sr. Santamarina. — Pido la palabra.

En el transcurso de los últimos agitados años de la política argentina, el doctor Francisco

Los servicios que prestó son los siguientes: en el Ministerio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, escribiente, desde el 1 de enero de 1869 al 30 de abril de 1869.

Oficial mayor, mayo 1 de 1869 al 24 de enero de 1875.

Poder Judicial: agente fiscal (departamento de la Capital), desde el 25 de enero de 1875 hasta el 30 de julio de 1878; juez de primera instancia de la Capital, desde el 31 de julio de 1878 hasta el 21 de agosto de 1888.

Corte Suprema: procurador desde el 22 de agosto de 1888 al 30 de abril de 1890; vocal, desde el 1 de mayo de 1890 al 31 de diciembre de 1891; presidente, desde el 1 de enero de 1892 al 31 de diciembre de 1892; vocal, desde el 1 de enero de 1893 a diciembre de 1895; presidente, desde el 1 de enero de 1896 al 31 de diciembre de 1896; vocal, desde el 1 de enero de 1897 al 31 de diciembre de 1899; presidente, desde el 1 de enero de 1900 al 31 de diciembre de 1900 y vocal, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1907, en que se acogió a la jubilación.

Servicios nacionales: vocal del Consejo Nacional de Educación, desde el 22 de enero de 1913 al 26 de mayo de 1914. El doctor Carlos Dimet falleció el 12 de diciembre de 1918.

*Matías G. Sánchez Sorondo.*

—A la Comisión de Peticiones.

**Sr. Presidente** (Sánchez Sorondo). — Se va a pasar al orden del día.

## 5

### COLONIZACION

**Sr. Caballero.** — Pido la palabra.

Voy a hablar, señor presidente, en general, sobre este despacho, cuyo informe oírlo, hecho por el señor senador por San Luis, escuché con la atención y el respeto que me merece siempre la ilustración del señor senador y la sinceridad que pone en la exposición de sus ideas y en la defensa de sus iniciativas.

**Sr. Landaburu.** — Muchas gracias, señor senador.

**Sr. Caballero.** — Quería hacer notar esta situación de mi espíritu con respecto al señor senador por San Luis, antes que apuntar algunas ideas sobre el asunto en debate, y sin ánimo de polemizar con el señor miembro informante; sólo me guía el propósito de dejarlas consignadas en el Diario de Sesiones, porque marcan una orientación en mi vida política, que será, quizá, definitiva.

Refiriéndome al proyecto en discusión, lamento tener que observar que, en general, lo considero atentatorio al sentimiento de la argentinidad, que es, precisamente, lo que en esta hora, debemos vigorizar y difundir. Y digo

esto, porque en este proyecto se consigna la idea de ir entregando lo que queda de la tierra argentina, ya sea fiscal o privada, al dominio de las masas extranjeras y extranjerizantes, que tienen ya en su poder casi la mayor parte de la riqueza argentina y que, agregándole estos medios económicos que este proyecto intenta poner en sus manos, juntamente con los beneficios del voto cosmopolita que ellas ejercitan y que se llama libre, les da una influencia tan grande sobre las multitudes nativas, que a mi juicio, resulta sumamente peligroso para los destinos de nuestra nacionalidad.

Me imagino que el pueblo argentino, formado por ciudadanos nativos descendientes de viejos extranjeros que llegaron aquí a trabajar la tierra, al lado de nuestros compatriotas, a ejercer sus industrias, a procurarse un bienestar económico, verían con desencanto la sanción de este proyecto si ella se hiciera de acuerdo a las disposiciones generales que contiene este despacho, porque reproduciría el propósito que inspiró algunas de las leyes dictadas por nuestros gobiernos llamados patricios, en virtud de las cuales la tierra argentina fué distribuida como herencia de proscriptos, entre poblaciones adventicias, que llegaron aquí amparadas por sus gobiernos de origen y por los nuestros, mientras el pueblo argentino era, ya, paria en su propia tierra!

Me parece que el señor miembro informante de la comisión ha establecido que desde el año 1857 hasta el de 1880, se incorporaron al país 5.500.000 extranjeros.

Esta población no ha podido ser absorbida por nosotros, por la influencia de los gobiernos liberales, ejercidos por los partidos de tendencia unitaria, que culminaron, en su acción destructora de la nacionalidad, en la reforma de la Constitución del año 1860.

Este problema de las colonias extranjeras, que se nos ha presentado de golpe, inesperadamente —los que han llegado en sus extravíos, según se ha dicho en el Senado y fuera de él, hasta pretender atacar la existencia misma de la Nación en combinaciones obscuras con los gobiernos de quienes esas colonias dependen— este problema, decía, es una consecuencia de la forma en que se ha tratado en el país, la situación de los extranjeros.

Los señores senadores recordarán que existe una ley del 10 de abril de 1821, en virtud de la cual a todo hombre que llegaba al país con ánimo de radicarse en él, y que luego, contaba con dos años de residencia, se le consideraba, no argentino todavía, pero, sí obligado con los mismos deberes que los ciudadanos argentinos.

Esta ley, que era sabia, que significaba la incorporación del extranjero a la comunidad argentina, fué, en realidad, sostenida por el gobierno del general Rosas en los años 1837 y 1838, cuando las cuestiones con el gobierno de Francia.

La pretensión de los gobiernos extranjeros en aquella época, respecto a sus súbditos radicados en el país, se estrellaron entonces con el concepto doctrinario del gobierno del general Rosas, pero no pudieron torcer la voluntad de ese gobierno de defender los principios básicos de la argentinidad frente a las potencias extranjeras, que querían destruirla y absorberla. Y todo el mundo sabe que la reclamación de cinco o seis ciudadanos franceses, trajo la ruptura de relaciones con Francia y el bloqueo de los puertos de Buenos Aires y del litoral argentino. Como se ve, este problema tiene, en realidad, un origen lejano entre nosotros.

Procurar, entonces, incorporar extranjeros, vinculados a sus gobiernos, en condiciones que ya negó el país en el año 1838, como lo hace este proyecto, significa mantener en pie este problema de las colonias extranjeras, que alguna vez tendremos que encarar y resolver en forma definitiva.

Por eso me opongo a la idea general del proyecto, de que esta tierra que se va a colonizar se ofrezca, en forma alguna, a familias extranjeras radicadas fuera del país. Pienso, entonces, que no debe estimularse la inmigración, sino organizar la colonización dentro del país con la población que vive en él, y, especialmente, con la población nativa.

Se ha hecho un concepto general de que los nativos son incapaces de trabajar. Sin embargo, todos los señores senadores saben, porque lo han visto, porque conocen este aspecto doloroso del éxodo de las provincias del interior al litoral en busca de un mejor salario en las cosechas; todos saben que son capaces de los trabajos más rudos y más convenientes al desenvolvimiento del país. Y cuando se propicio la invasión de nuestro territorio por poblaciones adventicias, el argentino nativo tenía, todavía, más capacidad; primero, porque trabajaba en todas partes, casi siempre en tierras de su propiedad; y, segundo, porque conocía a fondo todos los secretos de la industria pastoril.

Los que no ignoran —por haberlo leído u oído— cómo era la vida del país casi desde fines de la Colonia, tienen que saber que, a la par que pastores, los argentinos nativos, de nuestros campos, eran agricultores; no había estancia, no había pequeña propiedad rural en la que, a

la par que al cuidado del ganado, el campesino no dedicara también algunas parcelas a la agricultura para satisfacer las necesidades de los que las habitaban.

En cuanto a los argentinos de las ciudades, es sabido que todo lo que comprendía la industria pastoril, las artes manuales, la carpintería, tejidos, etcétera, estaba en sus manos, y eran tan hábiles en ello que no han sido superados. Yo he conocido infinidad de ejemplares de esos artesanos de las ciudades, que lo mismo eran artesanos que soldados en los campos de batalla. He conocido en Córdoba hombres viejos, de los tiempos de Paz y Quiroga, que practicaban todos los oficios; eran carpinteros, albañiles, herreros, y tenían todas las condiciones necesarias para ganarse la vida y para ser hombres dignos.

De manera que hoy no podemos ni debemos estimular la incorporación de gente nueva, diríamos, a nuestra población, provocando de nuevo la situación que ofrecieron las oleadas inmigratorias que inundaron el país, en un momento dado, contaminándolo con los males de orden moral y racial que ahora estamos palpando.

La situación del argentino de aquella época ha inspirado a un historiador nuestro, el doctor Juan Alvarez, un libro o un artículo —no recuerdo— en el cual habla de «la edad del cuero crudo», calificando así, con acierto gráfico, una época típica de la vida argentina. Todo lo que fué nuestra industria, entonces, estaba realizado por argentinos, y los elementos que se utilizaban para ello eran tan simples, que eso es lo que explica que este país fuera rico en aquella época y pobre en la presente; me refiero a la población. Con un cuchillo, una lezna, un pedazo de cuero, la industria pastoril daba los medios de movilidad a toda la industria argentina. Con los cueros se hacían los lazos, las coyundas con que se uncían los bueyes, se armaban los ejes de los rodados y las carretas que, como recordarán los señores senadores, transportaban desde todos los extremos del país, al litoral y puertos de embarque, los productos de las provincias.

No era una época salvaje, ni una época de haraganería, como la pintan los interesados en desprestigiar las condiciones raciales de este pueblo.

Era una época de trabajo productivo en heredades del interior; por ejemplo, se explotaban en La Rioja y Catamarca las minas de sus cerros y yo he alcanzado a ver en algunos ranchos riojanos, restos de los crisoles utilizados por los hombres de nuestra primitiva industria minera

Algo había de semejante en ese estado feliz del trabajo argentino, en lo que se refiere a las provincias dueñas de minerales, a la forma de explotar en las campañas del Sur de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires, la pequeña industria pastoril y agrícola. El minero de La Rioja, por ejemplo, tenía sus mulas, sus peones para traer los minerales y fundirlos en los crisoles, y traerlos, después, a Buenos Aires, y en las provincias del litoral el antiguo propietario tenía su pedazo de campo, sus vacas, sus haciendas y sus sembrados. De manera, que éste era el régimen social de nuestra vida y esto es lo que la inmigración adventicia, traía casi a la fuerza, por la propaganda que se hacía en Europa, vino a perturbar y a destruir.

Otro de los puntos que tengo que criticar en el proyecto en debate, es el que se refiere a la expropiación, no sólo de tierras sino a las de propiedad particular, para ser adjudicadas a terceros.

La propiedad particular, según nuestra Constitución, sólo puede expropiarse por causas de utilidad pública. Yo no soy abogado, pero leyendo los antecedentes históricos de las instituciones o de lo que se llama la democracia, en ninguna parte he visto que la propiedad particular pueda ser expropiada para adjudicarla a otra persona. La única doctrina que rige es la de expropiación por causa de utilidad pública. Yo sé que el señor miembro informante de la comisión ha suavizado el despacho de la Cámara de Diputados, pero se ha hecho eco también de esa idea confusionista y antidemocrática que se ha dado en llamar *la función social de la propiedad*, en nombre de la cual se llega a la enormidad a que acabo de referirme.

La propiedad particular no es una conquista de la democracia moderna; ella viene desde el fondo de la historia. Los legisladores que han dictado las instituciones básicas de los pueblos, han consignado la propiedad particular como inherente a la condición de ciudadanos, porque no se concebía, entonces, que los autóctonos de un país no tuvieran un pedazo de esa patria. Por ejemplo, en la legislación de Licurgo, 900 años antes de Jesucristo, ya está consagrada la propiedad particular; Solón consignó, también, la propiedad privada. Siempre hable del *ager púnnon*, para ser ciudadano de Atenas y de otras partes de Grecia. Y me parece que en las leyes de las XII Tablas, por lo menos, en la organización republicana de Roma, está hecha la distinción entre la propiedad privada y la propiedad pública.

En la exposición del señor senador por San

Luis he notado que, al referirse a la expropiación de la tierra pública no hace referencia a que la propiedad privada en Roma no fué expropiada nunca, ni se legisló sobre la propiedad privada. La propiedad privada, la que guardaba el dios Términus, era sagrada desde que se organizó esa república aristocrática que fué Roma. Los problemas se referían siempre a la división de la tierra conquistada, que era siempre la que se repartía y la que los patricios y plebeyos llegaron a tener casi toda en su poder y, abandonada, provocó todos los disturbios y cuestiones que se conocen.

Sostengo, entonces, que la propiedad privada no fué motivo de ninguna legislación tendente a socializarla. Fué respetada y en la reforma de los Gracos, yo no he encontrado alguna parte que se refiera a la expropiación de la propiedad privada. Siempre habla del *ager público*, de la propiedad común, que ha ido quedando en manos de gente reducida, que por cualquier causa había perdido su propiedad familiar o individual.

Ahora, cuando viene la realeza, la época feudal, entonces, sí, la propiedad privada llega a ser casi absorbida, por lo menos en doctrina.

La doctrina del rey absoluto hace que el único dueño de la tierra en un Estado bien organizado, como dice Bossuet, sea el rey. Luego, la democracia vino contra el antiguo régimen, desenvuelta ya la idea de la personalidad humana, en todas las direcciones de la vida y, como condición inherente a ella, este derecho de la propiedad privada. Ciendo la revolución llega, viene a reivindicarla contra la realeza, y no se estableció en ninguna parte que el hombre, por razón alguna, deba ser privado de ese derecho, que encarnaba el objeto y fin de la nueva civilización. Esta es la diferencia del criterio espiritualista con el criterio del materialismo histórico.

—Ocupa su banca el señor ministro de Agricultura, doctor Cosme Massini Ezcurra.

En lo que se refiere a las reformas agrarias y a la propiedad individual, la afirmación de que ésta no puede ser expropiada para entregarla a terceros, ha producido declaraciones terminantes de los revolucionarios más famosos. Por ejemplo, con respecto a la discusión de las leyes agrarias en la Convención francesa y en el club de los Jacobinos, me sorprendió que Marat —no se puede citar un tipo de demagogo más cabal— dijera en «El Amigo del Pueblo», en una profesión de fe que hizo el 30 de marzo

de 1793: «Me acusan de predicar la ley agraria, y eso es una impostura sin ejemplo». En cuanto a Robespierre —que es el que da el sentido doctrinario a un movimiento que no triunfó en la revolución y fué abatido por los que la representaban— Robespierre, digo, establece el derecho a gozar de la propiedad privada en la vieja convención, en uno de los dos discursos que pronunció; uno en la convención y otro en el club de los Jacobinos. El régimen que tenían ellos para preparar sus leyes era éste: en los clubs pronunciaban sus discursos y se hacía la aprobación por los concurrentes; después hacían la presentación de los proyectos en la convención, donde muchas veces repetían los mismos argumentos.

En los dos discursos, Robespierre establece que «la propiedad particular es el derecho que tiene cada individuo de gozar y disponer de la parte de la propiedad que la ley le garantiza».

Entonces, trasladándonos a nuestro país, cuando la Constitución no autoriza la expropiación de la propiedad particular sino por causas de utilidad pública, esa Constitución les da a los hombres que poseen algo un derecho que no puede ser destruido por ninguna otra legislación de detalle. Por eso, esa teoría de la *función social de la propiedad*, que es comunista, que es confusionista, que pretende destruir uno de los fundamentos orgánicos de la democracia, no puede ser aceptada. Si la democracia no se afirma sobre estos derechos primarios, como el derecho de la propiedad privada, no sé sobre qué se va a afirmar; si también declina eso, que es básico en su desenvolvimiento, entonces ya no tiene más porvenir que seguir vacilando en la arena también conmovida por las luchas de todo orden que la agitan, para caer vencida o humillada a los pies de cualquier absolutismo.

Por eso, siento profundamente, a pesar de las palabras tranquilizadoras del señor miembro informante de la comisión, que no se haya opuesto a este principio, con toda claridad, y me ha llamado la atención que el señor senador, de origen conservador, respecto a esta clase de ideas, hiciera el elogio de un autor y sostuviera su tesis, cuando, en realidad, ese autor no habla en nombre de la democracia que nosotros hemos consignado en nuestra Constitución, sino en nombre de un principio agitado por los extremismos absolutistas de los izquierdistas.

Esta idea de la función social de la propiedad, la agitó Lenin antes que nadie, y, luego, Trotzky. De acuerdo a ella, el Estado sería el único propietario, como en las monarquías absolutas,

donde lo es el rey. De manera que es una idea completamente antidemocrática.

**Sr. Villafañe.** — ¿Me permite unas palabras, el señor senador?

**Sr. Caballero.** — Cómo no, señor senador.

**Sr. Villafañe.** — Lo que acaba de decir, a mí también me toca, como firmante del despacho (*risas*), de modo que después que conteste el señor presidente de la comisión, miembro informante, me reservo el derecho de tomar la palabra para contestar sobre ciertos puntos, que siento me afectan.

**Sr. Landaburu.** — Si me permite el señor senador por Santa Fe, le diré que, deliberadamente, no había querido interrumpirlo en el curso de su exposición, en la cual ha hecho una calificación personal respecto a mi ideología, que no es, en realidad, la que me corresponde, en esta materia. No creo que yo pueda ser calificado como «conservador» en materia de legislación agraria.

Más adelante contestaré ampliamente sobre ese punto y otros que ha tocado el señor senador.

La expropiación, como medio de adquirir las tierras, en los planes de colonización, es algo que está en la doctrina y en la legislación positiva de todos los países civilizados del mundo, siendo un concepto que subscriben por igual, conservadores, socialistas, radicales y hombres de las más diversas ideologías.

**Sr. Caballero.** — A mí me parece que por las mismas condiciones del momento histórico que vivimos ha llegado el caso de separar un poco los que profesan ideas conservadoras de los que profesan ideas extremistas, porque la confusión se ha producido, precisamente, por esa clase de contacto y definir los actos no significa separar los hombres; puede ser que coincidan en un cierto grupo de ideas generales, de finalidades eficientes. Este es el sentido que yo daba a mis palabras cuando decía al principio, que no quería polemizar sino explicar una cosa que me parece del momento, y dar salida a un sentimiento del que yo no me he consolado jamás. Yo no he podido concebir a mi país poblado con gente adventicia a la que amparaba el gobierno de donde venía y los gobiernos nuestros, mientras que a la gente que había hecho el país, la veía perseguida, calumniada y olvidada. Eso es lo que yo quería decir alguna vez en el Senado.

**Sr. Palacios.** — De lo que expresa el señor senador, se deduce que aceptaría la expropiación si fuera para beneficiar a los argentinos exclusivamente.

**Sr. Caballero.** — A los que viven en el país es a los que debemos favorecer.

**Sr. Palacios.** — No olvide el señor senador que la función social de la propiedad ya se discutía y se sancionaba en Roma, y que hay profesores en nuestra universidad, que afirman que el derecho romano ha dado a este respecto soluciones a la que no ha llegado nuestro derecho positivo.

La legislación romana, en materia de propiedad, era mucho más amplia y de carácter más social que el Código Civil argentino. Lea el señor senador el artículo 2.513.

**Sr. Caballero.** — He dicho que sobre la población existente en el país, es sobre la que debe actuar este sistema de colonización, porque hasta los intereses de los extranjeros que han venido y de sus descendientes, que son iguales a los nuestros en este momento, podrían, tal vez, verse perjudicados, si cualquier régimen viniera a modificar la vida actual del país, como nos veríamos también perjudicados en nuestro bienestar los criollos que nada poseemos.

Mi propósito es, simplemente, evitar, como lo consigna el proyecto, que venga una nueva inmigración a aprovechar y desbaratar los esfuerzos y ventajas de nuestra tierra.

El señor senador se ha referido en su exposición, al latifundio. Cualquiera que oiga esta palabra se imagina que ella significa la gran propiedad con los caracteres que tenía esta palabra en Roma, que era la gran propiedad abandonada en manos del esclavo que la trabajaba y de los mercenarios que también trabajaban alguna parte. En ese sentido esta palabra no tiene sino una acepción muy restringida en el país, porque hay propiedades muy grandes, por ejemplo, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, a las que se las designa con el nombre de latifundios, pero en esas propiedades viven y prosperan —muchas veces más felices que sus mismos dueños— los colonos que la arriendan en condiciones favorables a su desenvolvimiento y a su bienestar. Esas grandes propiedades están cultivadas y pobladas por masas de ciudadanos nacidos en el país. No están desiertas. Por eso no considero prudente hablar, en general, de latifundios porque pareciera que fueran tierras abandonadas o utilizadas para placeres de señores. Estos latifundios, por el contrario, están supervividos por los grandes propietarios, que es una de las condiciones que aseguran la mejor producción. Conozco en la provincia de Santa Fe dos o tres campos en estas condiciones, que pertenecen a los señores Prat y Montes, entre los cuales tie-

nen 35.000 hectáreas, en distintos departamentos de la zona. Por curiosidad, los he recorrido hace algunos años; ellos solían desafiar a sus amigos para que encontraran un yuyo en los centenares de chacras en que tenían parceladas sus tierras, pero no se lo hallaba. Se había llegado al cultivo perfecto.

Quiero decir con esto que el latifundio en nuestro país, salvo algunos casos raros, como el de esos propietarios que tienen grandes extensiones, como las que mantienen algunas sociedades anónimas en el Chaco, como el sistema de explotación de La Forestal —que echaba abajo los montes para explotar el tanino, sin fijarse en los daños que se hacían a la tierra, y el caso de algunas otras propiedades abandonadas—, en general, lo que se llama latifundio, en la región agrícola, no solamente es beneficioso para los que arriendan, sino que también es un régimen de producción relativamente barato y que no tendríamos con qué substituir.

Estoy seguro que sorprenderá a los señores senadores lo que voy a decirles: en Rusia, lo que se permite como explotación privada, está bajo el mismo régimen del arriendo nuestro. El gobierno ruso ha dado entrada a los capitales privados para que exploten tierras que les han pertenecido y esos capitales privados alquilan las tierras, más o menos en las condiciones que lo hacemos aquí.

Voy a insistir, después, sobre este asunto, pero antes quiero alejar de los señores senadores la idea de que nosotros solamente tengamos las grandes propiedades. Por una casualidad, he conseguido un libro, en el que se hace un estudio completo sobre todas las regiones de Italia. Es del año 1910, y su autor es el señor Giuseppe Tomassetti. En él se hace un estudio de la propiedad en casi todas las regiones de Italia, hasta el año 1909. Italia tiene 300.000 kilómetros cuadrados; el país nuestro tiene 3.000.000 y pico de kilómetros cuadrados, de manera que ésa es la proporción para los latifundios a que me voy a referir.

Cerca de Roma, en el agro romano, a 5, 6, 8 y 10 leguas de la ciudad, cuando más, la propiedad privada la forman campos que varían desde 100 hectáreas hasta 2.646 hectáreas, que tiene el señor Mazzoleni, heredero de Achille. El campo Salino, que pertenece al príncipe Torlonia, tiene 1.289 hectáreas. El campo Selva, que pertenece a la señora María Torlonia, es de 1.120 hectáreas. De 200 hectáreas hay una gran cantidad. El campo de la señora Elena Borghese Appony, tiene 956 hectáreas; el de los herederos

del señor Mariano Tittoni, tiene 746 hectáreas; el del señor Humberto Sforza Cesarni, tiene 819 hectáreas. Y sigue una larga serie de 250 propiedades de distintas dimensiones.

Entre éstas hay 3 ó 4 de 5.000 hectáreas, 4 ó 5 de 4.000, 4 ó 5 de 3.000, 15 ó 20 de 2.000, como 50 de 1.000, 3 ó 4 que llegan a 100 hectáreas y 10 ó 15 propiedades que llegan a 50 hectáreas. Este es el régimen de la campaña romana. El gobierno del señor Mussolini ha tomado 2 ó 3 de esas propiedades que lindaban con la parte del terreno saneado y eso será lo único que habrá variado desde esa época hasta el presente; serán unas 5.000 hectáreas.

El régimen de la propiedad, allí, es el régimen del arriendo, un poco distinto del nuestro, porque no ha entrado esa especie de fanatismo por la agricultura. Todos los que han ido a Italia habrán visto grandes manadas de hacienda, vacunos, yeguarizos, ovejas, etcétera, porque la propiedad se arrienda, todavía, para usos pastoriles. Para ciertas industrias no se arrienda la tierra, por largo tiempo, como hacemos nosotros. Por ejemplo, para el ganado que tiene que irse a las montañas, en cierta época del año, se arriendan algunas propiedades sólo por algunos meses. En general, el agro romano es una tierra feliz, no solamente para sus dueños sino para los que consiguen el arriendo, porque el problema de todos estos países, antes de la situación actual de los gobiernos totalitarios, era éste. Teniendo trabajo, el obrero de cualquier oficio, no estaba en la miseria. Era la falta de trabajo y el exceso de población lo que ocasionaba los problemas de todo orden, de hambre y de miseria, como mañana se presentará en nuestro país —lo prevén los que piensan en las poblaciones intensivas—, en las ciudades y en la campaña.

Este régimen del proyecto que discutimos, sobre la parcelación del latifundio, lleva a un problema que ya nosotros, en la provincia de Santa Fe, lo hemos contemplado. Una propiedad de 50 u 80 hectáreas para una familia numerosa que tenga hijos que la exploten, no rinde suficientemente como para que los hijos de ese matrimonio se establezcan también en esa misma propiedad. Tienen éstos que irse a la ciudad. Es el *celibato*, de que hablaba el doctor Repetto, que se produce en las grandes estancias. Yo quisiera decir que, en realidad, donde más intensivamente se produce ese fenómeno es en las pequeñas chacras de la provincia de Santa Fe.

En un chacra de 30 hectáreas, situada en los mejores terrenos que tiene la provincia, no pue-

den vivir los hijos del primer matrimonio, y tienen que salir a buscar la vida en las ciudades, porque la época de las adquisiciones de campo, que ha sido un régimen entre los colonos de aquella zona, no puede volver porque se han encarecido los campos, porque ya están poblados por descendientes de ellos mismos. De manera que yo no tengo esa prevención del latifundio.

El señor senador por San Luis, también, en su discurso erudito —que he escuchado con mucha atención—, dijo que era posible la coexistencia de ese sistema de explotación. Lo ha dicho al principio, y ha querido atemperar en el despacho las ideas que se han agitado en la Cámara de Diputados, y lo ha conseguido.

En esta cuestión del arrendamiento, me parece que si el Consejo Agrario pudiera substituir, tal vez, esa función, se podría limitar a estudiar las condiciones del arriendo.

El sistema de arriendo en nuestro país, hasta los años 1912 y 1913, es cierto que era explotador —usaré la palabra— y en aquella época se produjo una gran huelga agraria en el Sur de Santa Fe y de Córdoba, porque las condiciones en que se alquilaba la tierra, eran muy onerosas para el trabajador. Se exigía, por cualquier tierra, el 35 y 40 % del producto de la misma, si el arrendamiento era por el tanto por ciento de la cosecha, y el colono tenía que dar la parte del patrón, trillada, embolsada y puesta en la estación. Además, tenía que pagar las cuadras que destinaba al pastoreo de los ganados que utilizaba para sus labores agrícolas.

En estas condiciones, el trabajo del campo era improductivo para el que lo realizaba y muy productivo para el patrón.

Eso fué lo que motivó la huelga agraria de 1912. El gobierno de Santa Fe, que lo ejercía el doctor Menchaca, siendo su ministro de Gobierno el doctor Herrera, nombró una comisión, de la que yo formé parte, para intervenir en este conflicto.

Con ese motivo tuvimos que recorrer todo el Sur de la provincia de Santa Fe y parte de la de Córdoba, y después del estudio de la situación entre los beneficios de los dueños de los campos y los beneficios que recibían los trabajadores, llegamos a establecer una especie de plan general para el arreglo de la huelga, que consistió en fijar un tipo de arriendo que no debía pasar del 28 %, según fuera la distancia de la tierra a la estación o a los puertos de embarque; y que no debía el colono pagar nada por las cuadras que destinara para la

alimentación de los animales que utilizara para sus trabajos.

Estas fueron las condiciones principales; se retiraron las gabelas de la entrega de gallinas y otros animales que los colonos podían criar, y se estableció, también, que el producto del arriendo destinado al patrón, lo retiraría de la chacra y lo embarcaría por su cuenta.

Esta situación se arregló, y la huelga, que en cierto momento llegó a ser pavorosa, quedó terminada.

Nunca he visto en la clase patronal, entre los propietarios de los campos de aquella provincia, una acción más espontánea y generosa. Hace muchos años que yo, que en aquel entonces propicié este arreglo como un «agitador agrario», quería hacerles justicia a esos hombres: todos los que tenían un pedazo de tierra en Santa Fe, rebajaron los arrendamientos en esta proporción, y si los señores senadores se fijan, verán que es el sistema que hoy rige en casi todas las provincias.

**Sr. Laurencena.** — El censo de 1937 no dice eso, señor senador.

**Sr. Caballero.** — ¿Qué dice?

**Sr. Laurencena.** — Dice que el arrendamiento es elevadísimo, superior al tipo que da el señor senador.

**Sr. Caballero** — No, señor senador; ha de haber algún detalle que se le ha escapado al señor senador.

Desde luego, no entro a analizar todos los puntos del arreglo, como, por ejemplo, el que se refiere a las tierras destinadas al cultivo de papas, porque en ellas, las rebajas se hicieron en forma distinta a las de las tierras que se arrendaban para el cultivo de cereales, como maíz, trigo o lino. Estaban sujetas a muchísimas condiciones que no deseo puntualizar aquí, porque sería interminable, pero la base general fué la que acabo de indicar. Aquí tengo toda la documentación, en la que consta que aceptan, arrendatarios y patrones, esa situación.

Este sistema de los arriendos es el que me parece a mí que mejorado, estudiadas a fondo las condiciones de cada tierra, la distancia que hay a cada puerto de embarque, etcétera, permitiría probablemente, al Consejo Agrario manejarse con los elementos actuales de la población, organizando la explotación más intensa, si se quiere, de la tierra, y extender más su acción organizadora de esta industria.

Voy a terminar estas observaciones, en general, señalando una cuestión, que la planteo para discutirla, tal vez, con nuestro distinguido colega, el señor senador Palacios.

Se pretende por este proyecto aumentar la natalidad y mejorar las condiciones económicas de la gente que puebla los campos. Esto del aumento o disminución de la natalidad es una ilusión generosísima, pero que no se puede conseguir sino accidentalmente, haciendo una legislación artificial, ya que la natalidad y la muerte están ligadas a una ley biológica general que comprende a toda la humanidad. Hay una proporción entre los nacimientos y los fallecimientos en la especie humana, que es fatal. Es una proporción que se mantiene fija, dentro de un nivel de aumento o disminución, pero en un equilibrio completamente incommovible. Esto es lo que se llama la ley de los grandes números en la vieja estadística y en los estudios biológicos.

Puede ocurrir, por ejemplo, que en una sección, en un momento dado, para equilibrar la proporción, que no puede fallar nunca, aumente la natalidad por causas completamente ajenas a la legislación artificial, y puede ocurrir que en otro, para mantener ese mismo equilibrio, aumente la mortalidad.

De ahí vienen los extravíos generales, que conducen generosamente a los hombres afectados por esa ley, a procurar modificarla. Pero la ley de los grandes números se mantiene completamente invariable. Este es un problema de biología profunda que está en el tapete de los estudios de la gente que se dedica seriamente a estas cuestiones. De manera que, ni aun desde ese punto de vista del aumento de la natalidad, me parece conducente este proyecto que discutimos, para lograr aumentarla.

Quería plantear, para terminar, este postulado, porque sé que tendremos que insistir sobre este punto cuando se produzca la discusión de otros proyectos que el Senado tiene a estudio.

Cuando se considere en particular este proyecto, si yo pudiera asistir a las sesiones del Senado, tendré el gusto de hacer algunas observaciones de detalle, que serán concordantes con las ideas generales que acabo de exponer, entre otras, las que se refieren al sistema de los concursos de los consejos agrarios locales. En mi opinión, habría que establecer que esos concursos deberán realizarse entre argentinos nativos. Esta será la única forma de darle un poco de importancia al argentino, en esa última parte de la ley donde se ocupa de este aspecto del problema. Los consejos agrarios van a manejar, en realidad, muchos intereses, y todo el mundo sabe cuáles son las situaciones raciales que se producen en este país, poblado por italianos, españoles, suizos, rusos, etcétera



Este sistema del concurso, que aparentemente satisface tanto a mucha gente, ha producido situaciones realmente extrañas. Yo le decía al señor senador Martínez que hay una repartición en la que todos los concursantes, por una casualidad, son extranjeros o extranjeros nacionalizados. Hay que probar la capacidad argentina, que tiene que demostrarse siempre en todos los concursos, en todos los puestos, en todas las situaciones. De manera que yo creo que esos concursos deben hacerse entre argentinos nativos.

Nada más, señor presidente.

**Sres. Villafañe y Palacios.** — Pido la palabra.

**Sr. Palacios.** — La cedo al señor senador por Jujuy.

**Sr. Villafañe.** — Muchas gracias.

Quería referirme, señor presidente, al problema del latifundio que ha tocado el señor senador por Santa Fe.

En primer lugar, el derecho de propiedad, como todos los derechos, tiene sus limitaciones en aquello que afecta o perjudica a la comunidad. No existe derecho que no tenga limitación. En cuanto al latifundio, hablar de él en términos generales, carece de significado, no se dice nada.

Entre nosotros, los argentinos, el latifundio ha sido una necesidad imperiosa en los primeros tiempos. Cuando los primeros conquistadores fundaban una ciudad, se repartían la tierra, haciéndose lo que se llamaba las encomiendas, y mercedes del rey, que consistían en la adjudicación de grandes extensiones de campo. No podía haber nada más justo, porque nadie se iba a exponer a todos los peligros de la primera hora, del indio, de las fieras salvajes, a todos los sacrificios que impone el desierto, sin el aliciente de ser recompensado con una gran extensión de tierra, que sea promesa cierta de bienestar y fortuna para el porvenir de sus hijos.

Más tarde, ese derecho se modificó con la llegada de los ferrocarriles, después de nuestra revolución y de la organización nacional. La influencia de la población, la seguridad en la vida, la mejor justicia, la paz y la tranquilidad, hacen que la tierra se subdivida; pero el latifundio nos ha legado males que es urgente combatir porque traban el progreso de la Nación en la forma que voy a explicarlo.

Yo le voy a decir al señor senador lo que sucede en los pueblos del interior y en la mayor parte de los territorios nacionales. Estoy de acuerdo en que todavía hoy es completamente necesario el latifundio en muchas regiones del país; en otras, resulta una maldición. En Jujuy, en Salta, en Tucumán, nosotros tenemos poblaciones de 1.000 a 10.000 almas, que viven aho-

gadas, asfixiadas por la cintura del latifundio, que no tienen leche, ni legumbres, ni aves para satisfacer las necesidades indispensables para la vida, porque a los dueños de esos latifundios no se les antoja producir ni arrendar terrenos para las necesidades de esas poblaciones.

Yo recuerdo, señores senadores, un caso ocurrido en Buenos Aires, en 1914, digno de mención. En una estadística de los días anteriores a la guerra, se expresa que se introducían desde Rusia a esta Capital, aves, legumbres y huevos, por valor de \$ 7.000.000 m/n. por año; de Italia se traían limones y otras frutas; y de España las aceitunas y naranjas por valor de millones. Y esta vergüenza sucedía, porque a los veinte minutos de salir en tren de Buenos Aires, en todos los rumbos se encontraban los latifundios de los ricos de esta Capital que no los trabajaban ni dejaban trabajar. Exactamente la misma cosa ha ocurrido en el interior.

Hace seis años hice un viaje a la Patagonia. El primer pueblo a donde llegué después de Neuquén, fué Chos Malal. Me encontré con una población enclavada en las montañas, completamente muerta; el lugar es riquísimo, con excelentes caudales de agua y todo lo necesario para levantar una gran ciudad. Pregunté cuál era la causa del atraso del pueblo y todos me respondieron: «Señor, estamos rodeados por los latifundios de cuatro grandes propietarios que nos ahogan. Mientras éstos no parcelen sus campos y los vendan, el pueblo seguirá muerto».

Me encontré con que lo mismo acontece en toda la Patagonia.

Yo tengo en preparación un proyecto que no encaja dentro de este proyecto de colonización; es sobre creación de ejidos de pueblos, que lo voy a presentar una vez que termine la discusión del que se encuentra en debate.

Mi proyecto, en pocas palabras, consiste en lo siguiente: crear una comisión en todas las ciudades y pueblos de la República que fije el ejido que debe tener una ciudad o pueblo en forma que le permita vivir a los habitantes con desahogo. El mal que provoca el latifundio es gravísimo. Hay estaciones de ferrocarriles, centros de ramales que van hasta el exterior y que unen varias ciudades, donde los pobladores no tienen lo más indispensable, como la leche, si es que no se la llevan de lejos; en cuanto a la tierra, o no la quieren vender o se pide por ella precios de oro. De manera que el problema del latifundio, señor senador, hay que encararlo en forma práctica según el lugar y las necesidades de cada región.

Esos son los motivos que hemos tenido para tratar esta cuestión del latifundio en la forma encarada por la comisión. Como yo he firmado el despacho me he creído obligado a dar estas explicaciones.

**Sr. Landaburu.** — Por lo demás, este despacho sólo ataca, en forma parcial, el latifundio, el que existe en las zonas colonizables y se trata de tierras que no están sometidas a ningún cultivo racional por su propietario, o de extensiones superiores a cierta medida, que permite considerárselas, con justicia, como verdaderos latifundios.

**Sr. Palacios.** — Si el señor ministro desea hacer uso de la palabra antes que yo, me será muy grato escucharlo.

**Sr. Ministro de Agricultura.** — Muchas gracias, señor senador, voy a hacerlo.

**Sr. Presidente (Sánchez Sorondo).** — Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura.

**Sr. Ministro de Agricultura.** — Voy a hacer una muy breve exposición fijando los puntos y la posición del Poder Ejecutivo en este asunto.

La ley que está a consideración del Honorable Senado, tiene una importancia indiscutible. El Poder Ejecutivo de la Nación tiene ya expresado sus puntos de vista sobre esta ley. El proyecto originario fué elevando a la consideración de la Cámara de Diputados por uno de mis antecesores, el doctor Miguel Angel Cárcano, hombre muy versado en esta materia.

Después, en las sesiones del año pasado, este proyecto fué apoyado con toda elocuencia por mi antecesor inmediato en la cetera de Agricultura, ingeniero Padilla. No quiero, entonces, fatigar la atención del Honorable Senado repitiendo cosas y haciendo historias retrospectivas sobre las leyes de colonización, sobre los innumerables proyectos presentados, y menos, después de la brillante exposición hecha por el señor miembro informante de la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio, al fundar el proyecto que está a consideración del Honorable Senado.

Se trata, señor presidente, de una ley trascendental de población y de radicación del colono y de la subdivisión de la tierra: ley de subdivisión de la propiedad, tendente a una explotación agrícola conveniente, que debe huir, en mi opinión, lo mismo de la gran extensión que del minifundio, ley que contribuirá a mejorar el standard de vida del trabajador rural y a tratar de convertir el arrendatario en propietario de la tierra que trabaja, que es la mejor manera de intensificar la producción de la tierra sin disminuir sus condiciones de fertilidad.

La tierra no se debe dividir arbitrariamente, y si queremos terminar con el latifundio, no debemos caer en el minifundio. Dueños de tierras extensísimas y con muy escasa población rural, no debemos pensar en crear la propiedad diminuta. No debe limitarse nuestra aspiración a crear propiedades que sólo le permitan al trabajador agrario tener medios de subsistencia precarios y que no le permitan atender a todas sus necesidades y a formarse su porvenir. La experiencia de Estados Unidos y de otros países nos demuestra que crear el minifundio, vale tanto como condenar a la población rural a la estrechez y a la miseria de los trabajadores del campo. Por lo tanto, no se trata de crear la pequeña propiedad rural sino la adecuada propiedad rural, y su extensión está, lógicamente, condicionada por la calidad y por la ubicación de las tierras.

Creo que el artículo 21 del proyecto de ley a consideración del Honorable Senado, da una idea bastante justa, bastante equitativa, sobre el concepto que hay que tener de este asunto.

Dice el artículo 21: «Adquirido un inmueble, el consejo procederá a subdivirlo en lotes, cuya superficie quedará subordinada a la naturaleza y topografía del terreno, y deberá calcularse en cada región, teniendo en cuenta que el agricultor pueda realizar la mayor parte de la labor agrícola utilizando su trabajo personal y el de su familia, y con capacidad productiva suficiente para cubrir sus principales necesidades de vida y acumular un capital que le permita mejorar sus condiciones sociales y económicas y la técnica de su explotación.»

Dije al principio, que se trataba de una ley de subdivisión y de población. La población se aumenta, señor presidente, con la natalidad, hoy decreciente y con la incorporación de contingentes de inmigración. La inmigración para nuestro país es un problema de intensa gravedad que debe preocupar la atención de los poderes públicos, sobre todo en las circunstancias actuales, en que, por los acontecimientos que ocurren en el mundo, pueden traernos inmigración indeseable, y creo que no debemos permitir que ellas puedan alterar nuestro orden institucional ni la esencia de nuestra nacionalidad. Nuestra población de la campaña permanece estacionaria. Crece solamente la población urbana. En un país eminentemente agropecuario y con grades extensiones despobladas, debe interesarnos principalmente incorporar habitantes, pero habitantes para la campaña, porque tenemos un desarrollo urbano tal vez hipertrófico en relación al desenvolvimiento demográfico de

los medios rurales, y según lo revelan estas cifras, desde 1869 a 1914, la población rural apenas se ha triplicado, mientras que la urbana aumentó más de quince veces.

Necesitamos inmigrantes que se radiquen en la campaña. A radicarlos en el campo, haciéndoles accesible la propiedad de la tierra, tiende este proyecto de colonización, en mi opinión.

En la enorme extensión de explotaciones rurales de nuestro país, el 65 %, más o menos, está trabajada por arrendatarios. Es preferible, en general, que el agricultor sea el propietario de la tierra. El amor por la tierra se adquiere por la propiedad; el propietario la trabaja con prolijidad y no la esquilmata, no la agota. La explotación del arrendatario es más bien exhaustiva, porque puede abandonarla cuando ya no le produce, cuando la fertilidad ha disminuido en proporción tal que le conviene dejar esa tierra para explotar otra.

El propietario quiere la tierra, diversifica su explotación y alterna la agricultura con la ganadería.

Somos un país de un porcentaje altísimo de arrendatarios. Como lo he dicho, son casi el 65 % de las 440.000 explotaciones rurales las que corresponden a arrendatarios.

Entre los países de gran producción rural, es sin duda la República Argentina la que tiene el porcentaje más alto de arrendatarios.

**Sr. Caballero.** — ¿Me permite el señor ministro?

**Sr. Ministro de Agricultura.** — ¿Cómo no, señor senador!

**Sr. Caballero.** — Es también, la República Argentina, la que tiene el porcentaje más alto de arrendatarios en buena posición económica, porque la generosidad y la manera particular de conducirse de los grandes propietarios ha permitido al arrendatario que deposite en el Banco de la Nación Argentina y en Caja de Ahorros, alrededor de \$ 1.000.000.000 m/n. Hay colonias enteras, por ejemplo, la Ramón, en Santa Fe, limitando con Córdoba, donde no hay un colono arrendatario que no tenga su automóvil.

Esa es la situación.

**Sr. Ministro de Agricultura.** — Así es, señor senador.

La ley en discusión no es enemiga del arrendatario, no se propone hacer arrendatarios, principalmente, sino hacer propietarios de la tierra, pero contempla también la situación de los arrendatarios, como muy bien sabe el señor senador.

Yo creo, señor presidente, que en esta ley se

contemplan las bases fundamentales de toda explotación agraria, que son: el hombre, en primer término, el agricultor, el colono, que es el objeto de esta ley y su razón de ser, el hombre, que no cualquiera puede ser agricultor, sino aquel apto por su laboriosidad y capacidad técnica o práctica, porque si elegimos mal el colono, la ley va a fracasar; tendremos legiones de colonos derrotados, haremos legiones de derrotados, en vez de legiones de hombres felices en la campaña.

Hay, pues, que preocuparse mucho de elegir el colono. Ya la ley prevé la forma en que se debe hacer.

El segundo punto de la colonización, es la tierra. No todas las tierras son susceptibles de colonización. Hay que hacer la elección apropiada de las tierras que se han de adquirir para colonizar; es necesario realizar estudios prolijos sobre el suelo, su aspecto agrológico, las condiciones meteorológicas y su capacidad de producción, sus distancias de los puertos de embarque y, en una palabra, sus condiciones económicas de productividad, porque no hay que creer que todas las tierras pueden ser objeto de colonización, porque la mayor parte de las tierras fiscales no están en esas condiciones.

Hay que evitar, igualmente, el excesivo valor de la tierra destinada a colonización. Hay que hacer una tasación cautelosa, cuidada, porque no es posible que se subdivida una tierra a cualquier precio. Es necesario hacer una tasación ajustada, fundada en la producción de la tierra, de manera que el colono pueda tener no solamente lo necesario para costear su vida y sacar los gastos de la labor agraria, sino también ir haciendo un fondo de reserva y ahorro, como lo establece la ley, que pueda ser utilizado en momentos que así convenga.

El régimen de pago debe igualmente asegurar al colono, abonando como parte del precio lo que pueda pagar como arrendamiento y tal vez un poco más, para que el colono llegue a la conclusión, por sí mismo, de que le conviene más ser propietario que arrendatario; de otra manera, no podríamos convertir al arrendatario en propietario y preferirá seguir siendo arrendatario.

Pero no debemos exagerar, en mi opinión, esa facilidad, porque no hay que perder de vista que ésta no es una ley que pueda llamarse de carácter filantrópico, de beneficencia, de caridad pública. Esta es una ley económica, social, y ése debe ser su carácter y lo que condicione

todas sus aplicaciones sobre el terreno de la práctica.

Por eso se exige en el proyecto el pago del 10 % al contado. Sigue después, en el proyecto que está a consideración del Senado, la forma de pago con el  $\frac{1}{2}$  % de amortización y el  $2\frac{1}{2}$  % de interés, que tal vez es bajo.

**Sr. Laurencena.** — Allí, la ley es filantrópica.

**Sr. Ministro de Agricultura.** — Ese es el carácter del que se debe huir; no es ésta una ley de beneficencia pública sino de carácter social y económico.

Vendrá, después, y esto es esencial, el crédito habilitador, por ejemplo.

El colono no es un capitalista de gran envergadura; es un hombre de trabajo con un capital limitado, que deberá tener un crédito habilitador, una vez comprobada sus condiciones de aptitud, conocimiento de la labor del campo y haberle seleccionado y adjudicado una tierra en condiciones de productividad y en condiciones económicas por su proximidad a los puertos de embarque o a los mercados de consumo. Habrá que habilitarlo muchas veces, porque no bastará ese fondo de ahorro de 4 %, que tiene ya un destino determinado.

Tenemos la experiencia del Instituto Autárquico de la Provincia de Buenos Aires, en el que se ha demostrado que la concesión de créditos habilitadores amplios a los colonos, ha dado muy buen resultado.

Y, por último, señor presidente, creo que hay otra condición establecida en la ley. Tenemos la selección del colono, la selección de la tierra y la forma cómoda de financiación para que pueda adquirir con facilidad la propiedad; y hay otra condición que para mí es esencial. Creo que el Estado no puede desentenderse de su colono porque lo haya radicado, porque haya dividido y amojonado la tierra y hecho la población; es necesario que continúe allí ejerciendo una especie de poder tuitivo, para orientarlo, para hacerle ver constantemente cuáles son los progresos y las necesidades de los mercados de consumo naturales para la producción. No puede desentenderse, tiene que tener allí una especie de asesor, de director técnico de los colonos para que los organice en cooperativas, para que les haga ver la conveniencia de la asociación de carácter deportivo y de cultura física; para que, en una palabra, les lleve a los colonos, no solamente la técnica agraria, sino también la civilización que existe en las ciudades y que ellos no pueden alcanzar siempre por la ubicación de sus propiedades.

Los recursos que se le asignan al Estado en esta ley para iniciar su acción, son escasos. No hay que pensar que con este capital inicial se pueda hacer una gran obra de colonización. Es cierto que se prevé ya en el proyecto de ley las cantidades que todos los años se irán estableciendo en la ley de presupuesto, para contribuir a la realización de sus fines; de todas maneras, me parece —repito— que es muy escaso el capital inicial.

Señor presidente: manifesté al principio de mi exposición, que no deseaba fatigar la atención del Honorable Senado y que quería, simplemente, fijar la posición del Poder Ejecutivo en este debate. El Poder Ejecutivo está de acuerdo, en líneas generales, con el proyecto de ley en discusión. En la discusión en particular, tal vez se puedan hacer algunas modificaciones a las que me referiré en el momento oportuno.

Se oye hoy en todas partes y en todos los tonos, que hay que volver a la tierra. Hay que volver a la tierra para tratar de encontrar un poco de felicidad para los hombres en estos momentos de tanta desgracia para la humanidad.

Creo, señor presidente, que con esta ley, tal cual ha sido despachada por la comisión o con algunas modificaciones que se le introduzcan, la República servirá este ideal que cada vez se acentúa más en la humanidad.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Palacios.** — Pido la palabra.

Llega este proyecto de ley, tanto tiempo esperado, en momentos difíciles para el país, que vive con la honda preocupación de defender sus valores espirituales, sus tradiciones idealistas, cuando en el mundo se derrumba la civilización de Occidente y las hordas arrasan ciudades y amontonan cadáveres.

La guerra no sólo golpea con fuerza en nuestro espíritu, sino que plantea, también, problemas angustiosos en el orden material. Los mejores mercados para la colocación de los productos agropecuarios se cierran y dentro mismo del país se sabotea la exportación argentina para los que todavía están abiertos, destruyendo así nuestras fuentes de vida.

Entretanto, el algodón, la lana y los cereales están depreciados. Se ha denunciado que miles de toneladas de maíz que pudieran ser aprovechadas para la fabricación de carburantes, se pudren en los depósitos. La miseria campesina reviste caracteres agudos; los campos se despueblan cada vez más —ya estaban despoblados— y los trabajadores del agro se amontonan en las ciudades y producen la desocupación.

Se agudiza el mal que ya existía en nuestro país semidesierto. Bienvenido, por eso, a pesar de sus deficiencias, este proyecto del Poder Ejecutivo.

No es, sin duda, un plan agrario capaz de realizar los fines que se propone: poblar el interior del país; racionalizar las explotaciones rurales; subdividir la tierra; estabilizar la población rural, sobre la base de la propiedad que queda sujeta a limitaciones y restricciones; y llevar el mayor bienestar a los trabajadores agrarios.

Pero iniciará la labor; orientará las actividades futuras y si se aplica con decisión y patriotismo, preparará las soluciones para nuestra agricultura desorganizada que no ha podido librarse de intermediarios y acaparadores que expolían el trabajo del productor, y dejan el campo desierto con inmensos latifundios.

Las explotaciones extensivas son la tradición en el país; los llamados latifundios han sido y son asiento de las grandes estancias que han dado a la República su característica económica, de índole principalmente ganadera. Esa forma primitiva de aprovechamiento de la tierra ha obedecido a circunstancias y exigencias del medio.

El latifundio —estancia, que cumplió su misión civilizadora, sería injusto no reconocerlo— es hoy expresión de egoísmo y de desierto.

Se ha transformado la economía de los países, por obra, sobre todo, de la máquina. Hay que regular la nuestra, para ajustarla a las propias necesidades, pues abandonada la tierra a las leyes de la competencia, se obtendría, como resultado, el crecimiento del latifundio, la acaparación de grandes extensiones en manos de las empresas extranjeras. Así hemos podido presenciar, impasibles, el fenómeno alarmante de que mientras las ciudades, en conjunto, han aumentado su población en 5.000.000, durante un cuarto de siglo, el campo la ha disminuido.

Al desatender el campo y su colonización, nuestros gobiernos han procedido como jardineros que cuidasen con esmero la copa de los árboles, sin procurarles el riego y el abono que reclaman sus raíces. El viejo lema alberdiano «poblar es gobernar» sigue siendo actual, para nosotros, aplicado al campo.

El campo no podrá poblarse sin la intervención directa del Estado, por un sistema eficiente de colonización que ofrezca al colono la estabilidad en la tierra; lo cual supone, naturalmente, la creación de la chacra y la granja, que significa la instauración de un sistema

de producción y circulación de la riqueza, inaccesible a los recursos particulares.

La granja despierta un sentimiento de solidaridad, dividiendo la tierra y acercando a los hombres. Podríamos, con ella, obtener una mayor productividad del suelo; así, la población nacional sería más numerosa y más sana, al mismo tiempo que aumentarían los productos, no sólo de la agricultura, sino de la ganadería, ya que es verdad demostrada que el máximo de población del ganado por unidad de superficie se encuentra, sobre todo, en países de chacras.

Considero que en este asunto no se trata meramente de un problema económico de rendimiento de los cultivos o sistemas de explotación, sino que, ante todo, se plantea una cuestión nacional de población y enriquecimiento de los campos, base de la fortaleza y prosperidad de la República.

No es necesario probar que el cultivo de la chacra y de la granja nos permitiría exportar productos que ahora importamos y cuya carencia en nuestro medio no puede ser más absurda e injustificada.

Por importante que sea este aspecto, es aún más importante, sin embargo, el que implica la necesidad de aumentar la población de nuestros campos y mejorar, a la vez, las condiciones de vida y las perspectivas económicas de sus habitantes.

A este fin se dirige el proyecto que a manera de ensayo presenté en el Senado, de colonización en Río Negro, y que no ha merecido la atención de la Comisión de Agricultura, ni el honor de ser citado.

**Sr. Laurencena.** — Ha sido una omisión, señor senador. Posiblemente, por haber caducado.

**Sr. Palacios.** — No tiene importancia. El territorio de Río Negro está, prácticamente, en manos de compañías extranjeras que explotan al hombre. Contemplar pasivamente esa situación anómala, es una actitud suicida. Y nadie más que el Estado la puede modificar; ni es posible conseguirlo a no ser por un sistema colonizador que permita el arraigo y asegure la prosperidad del pequeño propietario.

Es un sarcasmo cruel, el que pueda plantearse, entre nosotros, el problema de la desocupación, mientras permanecen nuestros campos estériles y desiertos. Y esto, que en tiempos normales no sería más que una aberración, implica, además, en la actualidad, el mantenimiento de un peligro, porque suscita la codicia de las naciones superpobladas.

Necesitamos, al mismo tiempo, substituir el empeño que hoy ponemos en conquistar los mercados exteriores, por el propósito de crear nuestros mercados internos, dando a los hombres del interior la posibilidad de ser consumidores. Y esto sólo podremos alcanzarlo, organizando la producción del cultivo de la tierra, con la ayuda del Estado, en un vasto sistema de colonización que transforme nuestras pampas inmensurables y desiertas en tierras nobles de paz y civilización.

Lo que reclama solución más urgente es la ruínosa despoblación de nuestros campos. Ya no se trata de falta de crecimiento proporcional al de las ciudades, sino del éxodo desconcertante de las gentes del campo que marchan hacia las ciudades.

La tierra abandonada por los que la trabajan, para acrecentar las poblaciones urbanas, es un mal temible, especialmente para los países agropecuarios como el nuestro.

Sin duda, se trata de un fenómeno universal, pero es doloroso comprobar que en ninguna parte del mundo tiene los caracteres agudos que reviste entre nosotros.

La invención de la máquina a vapor a fines del siglo XVIII, con lo que se encontró un motor que genera su propia fuerza motriz, consumiendo carbón y agua, produjo la concentración de la producción en las ciudades que antes, con la rueda hidráulica, se desparramaba por el campo.

Redgrave, citado por Marx, decía en 1866 que la máquina a vapor era el padre de las ciudades manufactureras y explicaba como en los primeros días de la manufactura textil, el emplazamiento de la fábrica dependía de la existencia de una corriente de agua de suficiente caída para dar vuelta a una rueda hidráulica. Y aunque el establecimiento de los molinos de agua fué la primera infracción al sistema de la manufactura doméstica, las fábricas situadas, necesariamente, a orillas de los ríos y frecuentemente a grandes distancias las unas de las otras, formaban un sistema rural, más bien que urbano, y sólo cuando se introdujo la fuerza del vapor para substituir la de la corriente, se reunieron las fábricas en ciudades y localidades donde había en suficiente cantidad el carbón y el agua requeridos para la producción del vapor.

De ahí que en los países más industriales se haya efectuado la despoblación del campo.

Pero, ¿y entre nosotros? Este fenómeno del urbanismo excesivo es más peligroso en países que carecen de carbón y donde la tierra es la base de la riqueza nacional. Nosotros, país

agropecuario, hemos superado en la proporción de vida urbana a los países industriales, excepto Inglaterra y Holanda.

La colonización de granja, de productor-consumidor, determinará, naturalmente, la absorción por el campo de una cantidad de familias que afianzarán la economía nacional.

Para la Argentina —ha dicho Alejandro Bunge, de cuyos trabajos me he ocupado en otra oportunidad—, lo esencial es volver al campo.

Somos uno de los países del mundo con mayor proporción de vida urbana. Tres cuartas partes de la población argentina vive en pueblos y ciudades de más de mil habitantes, dedicadas a las industrias, al comercio, a los transportes, a los servicios públicos, a la vida administrativa y demás actividades no agrícolas. Desde 1930 a la fecha, las ciudades han atraído una parte de la población del campo, precisamente lo poco que la campaña había recibido después de 1914.

En los veinticuatro años transcurridos después del último censo, el aumento de cerca de 5.000.000 se ha sumado a los pueblos, duplicando la población urbana del país. El campo no ha retenido siquiera una parte del crecimiento natural de su población. Y así, el 1 de enero de 1938, tenemos una población urbana de 9.440.000 y una población rural de sólo 3.320.000.

Con relación al total de 12.760.000 habitantes con que cuenta el país, la que vive en las ciudades representa un 74 %, o sea las tres cuartas partes de la población de la República.

En 1869, con un total de población de 1.737.000 habitantes, había una población rural de 1.164.000 habitantes, o sea 67 % sobre el total, y una población urbana de 573.000, o sea el 33 % sobre el total; en 1895, con un total de población de 3.955.000 habitantes, había una población rural de 2.294.000, o sea 58 % sobre el total, y una población urbana de 1.661.000, o sea el 42 % sobre el total; en 1914, con un total de población de 7.885.000 habitantes, había una población rural de 3.312.000, o sea 42 % sobre el total, y una población urbana de 4.573.000, o sea el 58 % sobre el total; en 1930, con un total de población de 11.188.000 habitantes, había una población rural de 3.580.000, o sea 32 % sobre el total, y una población urbana de 7.608.000, o sea el 68 por ciento sobre el total; en 1938, con un total de población de 12.760.000, había una población rural de 3.320.000, o sea el 26 % sobre el total, y una población urbana de 9.440.000, o sea el 74 % sobre el total.

No se trata de volver a la vida pastoril —dice Bunge—, cuando para cuidar 10.000 vacunos basta quince o veinte hombres, que nunca son sus propietarios, ni de desparramar más trigo

en grande escala, en campo ajeno, cuando no podríamos exportar la producción.

Se trata de que el que trabaja, se afine en la tierra en forma emocional, con producción diversa, predominantemente destinada a la propia familia.

Nuestro país produce casi todas las materias primas agrícolas que consume, y exporta de ellas grandes cantidades. Tiene, sin embargo, una ínfima población rural.

Ello se debe a la gran extensión de sus praderas, a su clima y a los sistemas extensivos de producción con ganados abundantes y máquinas agrícolas.

Bunge explica minuciosamente cómo en la Argentina, 3.300.000 habitantes rurales producen tanto o más que 14.000.000 de europeos, dedicados a la producción ganadera y agrícola.

Considera que esto es, sin duda, un privilegio para nuestro país, pero afirma que de ello no debe deducirse que sea conveniente que la población de sus centros urbanos se ha duplicado, en el curso de veinticuatro años, cuando la población de sus centros urbanos ha duplicado.

Si en los países europeos cada habitante del campo produce el excedente necesario para un habitante de la ciudad, y aquí, para tres, sin contar lo que se exporta, debemos aspirar, cuando menos, a que por cada tres habitantes que reciban los pueblos y ciudades de nuestro país, reciba el campo, uno, en lugar de ninguno, como ha ocurrido en veinticuatro años.

Y si no, seguiremos siendo un desierto inmenso y seremos incapaces de organizar una democracia de la que el mejor sostén será el trabajador autónomo de las campañas. La tierra puede constituir una gran riqueza. Es un poderoso agente de producción y de progreso, pero si el hombre no la domina por su esfuerzo, constituye un factor de atraso. En el monumento que los españoles erigieron en homenaje a la Nación, aparece en la base representando a la pampa, una mujer que, sonriente, espera al varón que ha de fecundarla. La obra es magnífica, pero el simbolismo es falso.

La tierra no se entrega; se resiste a la acción del hombre y si esa acción no es tenaz, la tierra se torna enemiga. Alguien ha dicho, con razón, que la tierra sólo es generosa cuando está vencida. No hay riqueza sin el hombre.

La tierra —decía Alberdi— es una máquina como el arado mismo, en manos del hombre, único productor. No hay producción de riqueza si la tierra no es fecundada por el hombre.

La tierra abandonada, desierta, carece de valor.

En la sesión del 5 de octubre de 1853, cuan-

do se trató de dar posesión de las islas de San Fernando a los ocupantes, frente a la resistencia de los legisladores, Vélez Sarsfield dijo: «Nuestros desiertos no se han de poblar, porque la poca liberalidad de nuestros principios nos induce a creer que tenemos oro en cualquiera extensión de terreno, a pesar de que nada se ha hecho en ellos después de trescientos años.»

En nuestra América los conquistadores recibían como recompensa extensiones de tierra inmensas. «Se otorga, decían los títulos, al capitán X, un territorio que se deslinda así: desde tal punto para un lado, hasta donde la vista alcanza; para el otro, hasta donde la vista alcanza». Y la vista de aquellos capitanes podía competir con la de las águilas...

Así se formó la propiedad territorial, desalojando al indio. Las mercedes reales, que fueron los primeros títulos, subsisten, señor presidente, en nuestro país, en las provincias de La Rioja y Catamarca, no obstante el régimen jurídico del Código Civil.

**Sr. Villafañe.** — Y en Jujuy también hay latifundios de 400.000 hectáreas.

**Sr. Palacios.** — Esto pasa inadvertido para los legisladores y se presentan proyectos de colonización que no advierten tal situación, pues los argentinos siguen creyendo que la patria es Buenos Aires y el litoral. Me alarma que el señor miembro informante, esclarecido hijo de San Luis, haya olvidado a los puntanos. (*Risas.*)

**Sr. Landaburu.** — Hemos introducido en ese sentido un agregado que permite excepcionalmente colonizar tierras en esas regiones.

**Sr. Palacios.** — Desgraciadamente, no será eficaz. Yo espero que el señor ministro acepte las proposiciones que haré oportunamente respecto al pago con el producto de la tierra, de acuerdo con el pensamiento del senador Laurencena con quien yo estoy de acuerdo, sin embargo, en que sea condición del contrato que el agricultor tenga máquinas, herramientas y animales. Continúo.

No hemos sido capaces de resolver el problema del campo, y la clase laboriosa que hace producir a la tierra vive lamentablemente; cuando comprobamos este hecho, nos parece oír al prócer, que un año antes de la emancipación decía: «El viajero a quien se instruyese, que la verdadera riqueza de esta provincia consiste en los frutos que produce, se asombraría, cuando buscando al labrador por su opulencia, no encontrase sino hombres condenados a morir en la miseria.»

El pensamiento de Mayo fué libertador y

justiciero; no pudo organizar el país, pero señaló orientaciones y marcó el sendero.

En 1812, ya Rivadavia se preocupaba de la cuestión agraria que conceptuó fundamental y se proponía con una gran visión del porvenir, repartir, gratuitamente, a los hijos del país, suertes de estancias proporcionadas y chacras para la siembra de granos, «bajo un régimen político —decía el prócer— que asegure el establecimiento de poblaciones y la felicidad de tantas familias, que siendo víctimas de la codicia de los poderosos vivían en la indigencia y en el abatimiento, con escándalo de la razón y en perjuicio de los verdaderos intereses del Estado.»

No eran «platónicas» para Rivadavia estas proposiciones, como se ha pretendido por algunos escritores, y tanto es así que al volver al poder en 1822 sancionaba el cese de la apropiación individual de la tierra pública estableciendo el contrato enfiteútico que entregaba la tierra como instrumento de trabajo.

En 1813, la Asamblea Constituyente abolió las vinculaciones y los mayorazgos para que la propiedad territorial pudiera circular y transmitirse. Ha pasado más de un siglo; se ha dictado la legislación de fondo para toda la República y las vinculaciones y los mayorazgos aun existen en algunos puntos de la República, lo que demuestra con claridad la desidia, la indiferencia de una parte de la Nación para con otra que, no obstante, mantiene reservas que pronto necesitará el país.

Otra ley sancionó que el Poder Ejecutivo podría disponer francamente de las tierras pertenecientes al Estado; lo que contiene, según Avellaneda, el principio fecundo de que el Estado no debe retenerlas con una codicia tan estéril como torpe.

La Asamblea derogó, además, el yanaconazgo, cláusula especial de las concesiones de tierra de labradío, por la que se concedía al agraciado el derecho de hacerlas servir gratuitamente por indios.

El Congreso de Tucumán de 1816 continuó la obra de la Asamblea de 1813, con su programa progresista, en que establecía el repartimiento de terrenos baldíos, la aplicación o venta de las fincas de temporalidades a beneficio de la agricultura y aumento de los fondos del Estado; la arreglada distribución de los naturales en plena propiedad de las tierras de comunidad, con alguna habilitación de las primeras herramientas para fomento de la labranza, bajo un derecho moderado, que facilitando el reintegro de esta

anticipación, ayudara a sostener las cargas del Estado.

En 1822 se produce un hecho de extraordinaria significación en la legislación agraria. A su regreso al poder, Rivadavia, con un «pensamiento profundo», según las palabras de Avellaneda, sancionó el cese de la apropiación individual de la tierra pública, estableciendo el contrato enfiteútico, que entregaba la tierra como instrumento de trabajo.

Es claro, que si había en esto un «pensamiento profundo», no se trataba sólo de inmovilizar la tierra bajo el dominio del Estado para que sirviera de base al crédito público.

Se substituyó el canon de la legislación antigua por uno movable que conservaba al capital y al trabajo lo que le correspondía, absorbiendo la parte de la renta que nacía del progreso social.

Fué Manuel Belgrano el precursor de la enfiteusis, entre nosotros. En un artículo publicado en el número 17 del «Correo» de fecha 23 de junio de 1810, aboga por la enfiteusis para suprimir la miseria, resolviendo el problema de los baldíos y realengos. Dice: «Se deja ver cuán importante sería que se entregaran tierras, no en arrendamiento, sino en enfiteusis a los labradores, propiamente tales, que todos sabemos es como un casi dominio directo, para que se apegasen a ellas y trabajasen como en cosa propia, que sabían sería el sostén de su familia por una muy moderada pensión; y seguramente, muy pronto, por este medio nos presentaría el campo, que nos rodea, una nueva perspectiva, subrogando este medio justo a la propiedad». Véase el libro de Luis Roque Gondra, *Las ideas económicas de Manuel Belgrano*.

Los congresales de 1826, se expresaban en el sentido de que este contrato hace gozar al poblador de todo el dominio útil del terreno, mientras que «el propietario que es la sociedad», goza, también, de una renta segura que representa el dominio directo.

Y Paso, decía: «No es conveniente, menos en nuestra forma de gobierno que en otra, que haya grandes propietarios y un montón de hombres pobres, todos en dependencia de aquéllos.»

Los congresales quisieron preservar al país de la acumulación de la propiedad territorial. La facilidad de monopolizar las tierras —decían con clara visión— formaría una clase privilegiada que abusaría de su posición para romper el equilibrio en que estriba la estabilidad de una república. Así se abriría la puerta a una aristocracia fincada, tanto más temible cuando su propensión natural es apoderarse de los manantia-



les de riqueza del país, desde el seno de la ociosidad y de la corrupción.

El sistema de Rivadavia no era el romano o el feudal. Los que tal lo juzgaron, engañados con el nombre, y sin penetrar en el fondo de las cosas, han incurrido en error, como lo hace notar Avellaneda en sus *Estudios sobre las leyes de tierras públicas*.

Las enfiteusis romana y feudal tenían por base la tierra, como propiedad privada, exclusiva, perpetua. La enfiteusis argentina, en cambio, se basaba en la tierra como propiedad colectiva, inalienable, conservando la venta en interés de la sociedad, por cuanto el canon que pagaba el enfiteuta sólo representaba lo que pertenecía a la sociedad, por el aumento del valor que ella misma creaba.

Rivadavia con su enfiteusis producía la más radical innovación social de su siglo que sólo era factible en América, donde se disponía de grandes extensiones de tierra despoblada.

El más grande de los héroes civiles de nuestra historia, precursor de Henry George, abogó en nuestro país por la propiedad colectiva de la tierra.

Yo sostengo que el sistema rivadaviano es aplicable a nuestro país, y debe aceptarse, subsidiariamente. No se desenvolvió la enfiteusis debido a la tiranía que la consideró una concepción unitaria. Ella hubiera podido impedir la especulación, pero, desgraciadamente, se la hizo fracasar con leyes que la desautorizaron. El canon que se fijara en 1826 —dice Avellaneda— de acuerdo al valor de las tierras, bastaba para reprimir la especulación que las reúne en grandes porciones, sin tener la capacidad o los recursos para explotarlas provechosamente.

Miguel Angel Cárcano, nuestro embajador en Francia, en su libro *Evolución Histórica del Régimen de la Tierra Pública*, ha dicho que «la enfiteusis de Rivadavia y la cantidad de disposiciones que la ponían en movimiento, favorecían la labor de la tierra, seduciendo actividades para objetos que merecían tanto la atención y el cuidado públicos. Los apellidos tradicionales solicitaban suertes de estancia. Los hombres jóvenes salían a trabajar al campo; la agricultura y la ganadería adquirían impulsos estimulados por corrientes fuertemente acentuadas.»

Lucio Vicente López, en su libro *Derecho administrativo argentino*, afirma que Rivadavia, «que en muchos de sus propósitos políticos reveló grandes ideas, tuvo con motivo de la enfiteusis la inspiración del genio humano». Y agrega: «Si su propósito político y social hubiera triunfado, si en vez de malbaratarse la

tierra pública como se malbarató después en tiempo de Rosas y otros gobiernos, de una manera arbitraria e irregular, probablemente esta gran cuestión de la crisis financiera y especialmente la que afecta el crédito de la provincia más rica de la República, estaría resuelta. De manera, pues, que si hay algo de grande y de noble, es hacer justicia a este hombre de Estado que tuvo la visión del porvenir, conservando la tierra que si no se hubiese enajenado, probablemente este país sería más feliz».

Una ley de colonización puede, a mi juicio, aprovechar esa institución para la tierra pública.

Gerónimo Cortez Funes, en un erudito trabajo sobre la enfiteusis, como instrumento de colonización, ha sostenido que ella presenta, desde luego, la ventaja de impedir que la tierra pública escape sin provecho para el país, de manos del Estado, dejando, al mismo tiempo, margen para que éste se desprenda de ella, cuando circunstancias propicias autoricen su enajenación en condiciones ventajosas. Pudiéndose fijar un máximo a las concesiones, se evita el acaparamiento, que no podría producirse, por otra parte, en cuanto el enfiteuta tiene la obligación de mejorar el fundo, condición que difícilmente llenará el especulador.

«Para el enfiteuta —agrega— este sistema presenta todas las ventajas de la propiedad, puesto que estableciendo una duración de noventa y nueve años como en el régimen francés, se convierte esta locación temporaria en casi perpetua. En noventa y nueve años pasan tres y cuatro generaciones y para la vida de un pueblo, ese lapso es un día de su existencia. Se cumpliría prácticamente de esta manera, y salvando el inconveniente de la perpetuidad absoluta, el precepto romano: *Vectigalis vocantur, qui in perpetuum locatur*...

«Se concilian por consiguiente con este sistema los dos intereses cuya armonía es indispensable para una solución acertada de la cuestión, pero que casi siempre se encuentran en pugna: el del Estado y el del individuo. El Estado se encontraría al finiquitar el contrato con una extensión enorme de tierra, valorizada sin duda en alto grado, tanto por las mejoras introducidas por el enfiteuta, como por el progreso constante del país y que constituiría una formidable fuente de recursos de fácil realización. Los individuos, por otra parte, serían atraídos por la entrega de esas tierras que constituye casi una propiedad, sin más obligación que el pago del canon, fácil de efectuar cuando la cosecha es buena y que se disminuiría o extinguiría en caso

de disminución o pérdida de la misma, siguiendo los principios tradicionales.

«Un sistema encerrado en estos lineamientos generales solucionaría, en mi sentir, el problema de la colonización de la tierra».

Alguna vez se propuso en el país, sin éxito, la solución del problema agrario, adoptando para los planes de colonización y fomento, no un sistema único, sino presentando a opción de los interesados dos formas de colonización, de perspectiva distinta, pero ambas eficaces desde el punto de vista del interés social. Por el primero se ofrecía un arrendamiento vitalicio, rescindible por la sola voluntad del colono, que otorga los beneficios de la propiedad sin ninguno de sus inconvenientes. Esta forma de arriendo por un término que excedía al máximo admitido por el derecho común está autorizada, tratándose de bienes del Estado o sus establecimientos de utilidad común, por la prescripción del artículo 1.502 del Código Civil, que difiere esa clase de contrato a las disposiciones del derecho administrativo.

La segunda fórmula de opción, financiada con un plan completamente distinto, ofrecía el dominio pleno de los bienes materiales, con la posibilidad de alcanzar con pagos a cómodos plazos, la propiedad de la tierra laborable.

Con la primera forma, se tendía a conservar y acrecentar el dominio privado del Estado, y por medio de la segunda, se procuraba la división del latifundio.

¿Qué inconveniente habría en aceptar por una ley nacional, también el sistema de la enfiteusis, con las modificaciones que se creyeran útiles? Enfiteusis que, si no da propiedad, la estabilidad, que es, en síntesis, lo que quiere el labriego.

Así, tendríamos que las tierras rurales de propiedad de la Nación, podrían declararse inalienables, con excepción de las de pequeña extensión, mala ubicación o defectuosas condiciones.

Las tierras rurales que se declaran inalienables, serían divididas en fracciones adecuadas a la ocupación de una familia agricultora y cedidas en condiciones de arriendo mediante un canon anual y semestral que sería revaluado cada cuatro años, de acuerdo al precio promedio de los arriendos, en dichos períodos, en las zonas respectivas. En caso de que no se hubiera establecido dicho promedio todavía, el

canon sería fijado por la Dirección de Tierras, en un porcentaje de la avaluación fiscal, a los efectos de la contribución directa.

Las concesiones serían vitalicias e intransferibles y de canon movable, pero los concesionarios podrían rescindirlos en cualquier momento. En caso de fallecimiento del concesionario, sus herederos podrían continuar el arriendo, con preferencia respecto de terceros. No se admitirán los subarriendos.

El pago del canon sería semestral en las explotaciones granjeras, y anual en las de chacras, pagadero por períodos vencidos. Sería también a cargo del concesionario el canon de riego si ese servicio existiere o se estableciere.

Los concesionarios podrían efectuar mejoras, que serían indemnizadas al terminar el contrato según su valor de tasación, de acuerdo a normas y tablas que se fijarían.

Reconozco que hay trabajadores del campo que reclaman la propiedad, y sólo la propiedad, pero es indudable que la estabilidad por medio de la enfiteusis se parecería mucho a la propiedad y beneficiaría al Estado.

La enfiteusis rivadaviana, que principió luminosa, marcando la aparición de vastos propósitos, según las palabras de Avellaneda, desaparece abismándose en la tiranía.

En 1834, 1837 y 1838 se da un nuevo empleo a la tierra. Se entrega a los soldados que regresan de la campaña del desierto. La ley de premios, en 1839, fué desastrosa por el despilfarro de la tierra, que se convirtió en instrumento político. Se ordenó que los enfiteutas que dentro de tres meses no hubieran comprado las tierras que se les habían concedido, perderían sus derechos. La mayor parte eran unitarios emigrados; de modo que, en realidad, se hizo una confiscación.

**Sr. Presidente** (Sánchez Sorondo). — ¿Desea un cuarto intermedio el señor senador?

**Sr. Palacios.** — Si el señor presidente quiere...

—Asentimiento.

**Sr. Presidente** (Sánchez Sorondo). — Invito al Senado a pasar a cuarto intermedio.

—Así se hace, siendo la hora 18 y 43.